

Durante los días 22 a 24 de febrero pasado, se celebró en la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el Congreso Internacional de Derecho Social, en el que se contó con la participación de especialistas de diversos países.

En el marco de este Congreso, se desarrolló la mesa titulada “Derecho Agrario”, misma que por su trascendencia reseñamos a continuación. En ella participaron Carmen Laura López Almaraz, Marco Vinicio Martínez Guerrero, Rubén Gallardo Zúñiga y Jesús Ramírez Garibay; la mesa estuvo moderada por Jorge A. González Galván.

En su oportunidad, Carmen Laura López Almaraz, con el tema “Autoridades agrarias”, hizo referencia a la importancia de la reforma al Artículo 27 constitucional de 1992, la que permitió no solamente reformar el marco legal agrario, más aún, dio paso al establecimiento de la Procuraduría Agraria y de los Tribunales Agrarios, estos últimos encargados del conocimiento y solución de la diversa problemática que se presenta en el medio rural.

Dichos tribunales —el Superior y los Unitarios Agrarios— tienen sustento y apoyan su actuación en el Artículo 27 constitucional, fracción XIX, la Ley Agraria, su Ley Orgánica, así como en su Reglamento Interior, entre otras disposiciones. A partir de la reforma aludida y a la fecha, se han constituido como la autoridad sustituta en materia agraria.

Por su parte, Marco Vinicio Martínez, al abordar el tema “Intervención estatal en el campo mexicano”, señaló que durante la mayor parte del siglo xx, el Estado mexicano, animado por décadas de intervención en la agricultura y la reforma agraria, y facultado por el Artículo 27 constitucional y por varios apoyos jurídicos como las leyes federales de reforma agraria, aguas y de asociación rural, se sentía obligado a tratar de forjar el futuro del panorama de la agricultura mexicana.

Sin embargo, la lógica de la intervención del Estado en la agricultura fue cambiando, debido en gran medida a la creciente internacionalización de la economía mexicana en general y de la economía rural en particular.

Actualmente, la estrategia rural de la presente administración, plasmada en el Acuerdo Nacional para el Campo, firmado en abril de 2003 por el Ejecutivo y las principales organizaciones campesinas del país, consiste en el apoyo decidido a la agricultura empresarial y en al apoyo esencialmente asistencial al sector mayoritario de subsistencia. De esta suerte, nuevamente queda marginada del desarrollo la mayoría de los campesinos mexicanos que se tienen que conformar con programas de apoyo que no alcanzan para incentivar la productividad.

En su momento, Rubén Gallardo Zúñiga, con el tema “Surgimiento, evolución y perspectivas de las autoridades agrarias en México”, señaló que por cerca de siete décadas se contó con autoridades agrarias de carácter administrativo; en consonancia con lo anterior, señaló que actualmente, y en atención a los cambios observados en los años recientes al régimen jurídico agrario, es necesario señalar que todas las dependencias que integran el sector agrario, tomando como punto de partida a la Secretaría de la Reforma Agraria, la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional y el Fideicomiso Fondo nacional de Fomento Ejidal, cumplen tareas importantes a favor de los hombres y mujeres del campo.

Por lo que hace a la Procuraduría Agraria, surgió como resultado de la citada reforma constitucional del 6 de enero de 1992, en la fracción XIX, del Artículo 27, con el objeto de atender las diversas solicitudes de atención de los distintos sujetos agrarios, a quienes se les atiende mediante: asesoría, orientación, realización de gestión administrativa, representación en juicio, así como conocer de las distintas quejas o denuncias que se presenten por la irregularidad cometida por servidores públicos en contra de sus derechos agrarios.

Asimismo, Jesús Ramírez Garibay, con el tema "Resolución de conflictos agrarios. Revisión en la coyuntura actual", manifestó que durante algunos años hemos venido planteando la necesidad de dotar a la materia agraria de Métodos alternos de resolución de conflictos donde los núcleos, sujetos agrarios y campesinos en general tengan la posibilidad de, ante un conflicto, optar, si así lo prefieren, por vías distintas a la jurisdiccional para resolverlo.

Los Métodos alternativos de solución de conflictos, sostuvo Ramírez Garibay, surgen también como una consecuencia a la serie de cambios que hoy se presentan en el mundo, la evolución del pensamiento del hombre y como una alternativa democrática para que los contendientes en un conflicto tengan la oportunidad de resolverlo entre ellos, después de todo se ha dicho que: "la mejor justicia es aquella a la que arriban las partes por sí mismas".

En materia agraria puede decirse que contamos con gran experiencia en la atención de conflictos a través de la conciliación que se lleva ante la Procuraduría Agraria y, en fechas más recientes, la Secretaría de la Reforma Agraria, pero éstas han sido más de tipo pragmático, que a través de procedimientos estructurados, con ausencia de legislación y reglamentación suficiente para hacerle frente a los conflictos, aún así consideramos que el saldo es favorable.

